



## *Poder Judicial de la Nación*

TRIBUNAL FEDERAL DE JUICIO N° 2 DE ROSARIO

FRO 7/2019/TO1

Rosario.

### **VISTOS:**

En Acuerdo, dentro de los autos caratulados "**PASCUALI, Victor y otro s/asociación ilícita fiscal**", expediente **FRO 7/2019/TO1**, del registro de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 de Rosario.

### **Y CONSIDERANDO:**

I. Que el Dr. Ricardo Uguet, a cargo de la defensa del encartado Luciano David Rodríguez, solicitó la extinción de la acción penal por insubsistencia de misma por afectación al plazo razonable, y subsidiariamente, planteó "*la nulidad de la elevación a juicio (parcial) por abarcar solo a mi defendido y a Víctor Luis Pascuali, pero dejando afuera a Daniel Santa Cruz, supuesto tercer integrante de la asociación ilícita investigada*".

Para fundar su petición, puntualmente en orden al primero de los planteos, refirió que "*los hechos investigados corresponden al periodo 01/2016 - 08/2017 y la elevación a juicio se produjo recién en noviembre de 2024, y de manera parcial, pues falta uno de los supuestos integrantes de la asociación ilícita*", por lo que solicitó que "*se declare extinguida la acción penal por aplicación de lo dispuesto en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (art. 14) y la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8), que rigen en virtud del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional*".

En ese orden, citó al precedente "*Espíndola*" (Fallos: 342:584)" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto señaló que "*al mencionar que el art. 8 de la CADH, en el que se enmarca el principio del plazo razonable (art. 8.1) como parte integrante de las "Garantías Judiciales", ha sido entendido por la Corte IDH como referido tanto a las exigencias del debido proceso legal como al derecho de acceso a la justicia y es en esta misma línea como debe ser interpretado pues no existe un debido proceso allí donde la parte no encuentra una satisfacción plena de su derecho a obtener de todas las instancias procesales una respuesta a sus demandas en un plazo razonable de*



*duración del proceso, máxime si este es uno de índole penal. En dicha causa se sostuvo, además, que el derecho fundamental que asiste a todo acusado a ser juzgado dentro de un plazo razonable, que garantiza la Constitución Nacional y los tratados a ella incorporados (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional), prevalece frente a las reglas del derecho común -o a la actividad procesal realizada en aplicación de ellas- que impiden su realización efectiva. En particular, el derecho en cuestión es independiente de los plazos generales que el legislador ordinario impone teniendo en mira clases de casos, como lo serían los términos de prescripción de la acción penal (Dossier "Garantías en el Proceso Penal I", Plazo Razonable, Secretaría de Jurisprudencia de la CSJN, Abril 2023)."*

Por otro lado, en subsidio de lo mencionado precedentemente, solicitó que se declare la nulidad *"de la elevación a juicio (parcial) por abarcar solo a mi defendido y a Víctor Luis Pascuali, pero dejando afuera a Daniel Santa Cruz, supuesto tercer integrante de la asociación ilícita investigada"*.

Para fundar su pretensión, señaló que *"se ha resuelto que para la configuración de la asociación ilícita resulta indispensable que la acción esté dirigida cuanto menos 3 contra tres sujetos activos y corresponde la absolución de los dos imputados por asociación ilícita si en el acto de la indagatoria solo se dirigió esa imputación contra dos de los integrantes de la misma (CCC, Sala V "Bagala Roberto" Rta. 11/8/99, LL2000-B,181). Esa línea es seguida por SOLER, quien considera suficiente con que la acción esté dirigida o cuando menos lo haya estado contra tres imputados. En igual sentido afirma ZIFFER que la imputación debe dirigirse al menos contra tres de ellos (ZIFFER, P. "El delito de asociación ilícita" Ad Hoc 2005, p. 77/9.)". "Lo cierto es que la ausencia en el proceso de alguno de los tres miembros cualesquiera que sean las razones habrá de generar una situación en la que la condena de los otros dos necesariamente habrá de apoyarse en terreno pantanoso" (¿Asociación ilícita o defraudaciones reiteradas? por Federico A. Borzi Cirilli, 4 de Abril de 2018, [www.saij.gob.ar](http://www.saij.gob.ar), Id SAIJ: DACF180076)."*





## *Poder Judicial de la Nación*

TRIBUNAL FEDERAL DE JUICIO N° 2 DE ROSARIO

FRO 7/2019/TO1

Continuó diciendo que *"Debe tenerse presente, además, que, tal como se encuentra redactada -asociación ilícita fiscal, art. 15, inc. c, ley 24769-, el dolo exigido -"a sabiendas"- se configura con la voluntad de pertenecer y de saberse realmente perteneciente al grupo y ser aceptado por los restantes miembros, aun cuando el acuerdo pueda ser tácito o expreso (García Vizcaíno, Catalina, "Delitos contra el orden público/3. Asociación Ilícita", Lexis 5605/6143, citado por Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sala B, Averiguación Evasión Impositiva 27/04/2009, Cita: TR LALEY 70052834 )."*

En virtud de ello, consideró que *"al no formar parte del debate el supuesto tercer integrante de la asociación ilícita, falta el requisito esencial del tipo penal: el acuerdo de voluntades sostenido en el tiempo entre tres o más personas en orden a cometer delitos tributarios."*

**II.** Que en orden a la naturaleza del planteo efectuado por la asistencia letrada de Luciano David Rodríguez se corrió vista al Ministerio Público Fiscal.

**i.** En oportunidad de dar respuesta a la vista conferida, como primera medida, la señora Fiscal Federal hizo una breve mención de las actaciones incorporadas a la causa, y en ese orden destacó que *"la presente causa tiene inicio por ser un desprendimiento de las causas "Yampay S.A. s/ evasión agravada tributaria" caso Coirón N° 33923/2018; "Porta, Silvia Viviana s/ evasión agravada tributaria" caso Coirón 33933/2018 y "Fram, Silvia Beatriz s/ evasión agravada tributaria" Caso Coirón 33936/2018, el 28 de diciembre de 2018, momento en el que el Ministerio Público Fiscal presenta el Requerimiento de Instrucción"*.

Luego hizo referencia a la complejidad de los hechos ventilados en autos, en función de los cuales, la fiscalía tuvo que impulsar diversas medidas tendientes a escalar los mismos; y precisamente entre dichas medidas probatorias, destacó *"los oficios librados a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), actualmente Agencia de Recaudación y Control de Argentina (ARCA), a la empresa de*



*telecomunicaciones Telecom, y a la Policía Federal Argentina (PFA), con el objetivo de obtener información relevante vinculada tanto a la identidad y situación fiscal de los encausados como a las maniobras presuntamente desplegadas por los mismos".*

*Respecto de esto último, destacó que "las medidas mencionadas fueron adoptadas con celeridad y dentro de plazos razonables, observándose una respuesta diligente por parte de los organismos y entidades intervinientes", sosteniendo que "no se advierte dilación injustificada alguna en la tramitación o ejecución de las actuaciones, sino que, por el contrario, puede afirmarse que las mismas fueron encadenadas de manera ordenada y eficiente, permitiendo así el avance progresivo del proceso investigativo"; y agregó que "Estas actuaciones constituyen un ejemplo del impulso procesal sostenido y de la coordinación interinstitucional orientada a la recolección de prueba, en cumplimiento de los principios de eficacia, legalidad y debido proceso".*

*Luego retomó sobre la actividad procesal desarrollada en el marco de la presente causa, y manifestó que "tras la realización de diversas diligencias tendientes a establecer con precisión el domicilio de los imputados; finalmente se concretó la toma de declaración indagatoria de Víctor Luis Pascuali el 23 de noviembre de 2021, y de Luciano Rodríguez el 15 de marzo de 2022; restando dar con el paradero de Daniel Santa Cruz quien no fue habido en los domicilios aportados en las investigaciones". En función de esto último, el día 18 de marzo de ese año, "el Juzgado Federal de San Nicolás solicitó a la Delegación Mercedes de la Administración Federal de Ingresos Públicos, eleven la totalidad de los datos filiatorios del antes nombrado.*

*Respeto del nombrado Santa Cruz, aclaró que del "informe proveniente de la División Jurídica de la Administración Federal de Ingresos Públicos; y atento el Sr. Daniel Santa Cruz no ha podido ser habido en el*





## *Poder Judicial de la Nación*

TRIBUNAL FEDERAL DE JUICIO N° 2 DE ROSARIO

FRO 7/2019/TO1

*presente expediente de acuerdo a los informes de la Unidad Operativa Federal Campana y del Organismo Recaudador, fue que el Juzgado interviniente solicitó la averiguación de paradero del encausado".*

De seguido, la fiscalía remarcó todo el derrotero de pronunciamientos judiciales; concretamente, destacó que en fecha 29 de noviembre de 2022, se dictó la resolución de procesamiento de los encartados Pascuali y Rodríguez, manteniendo la averiguación de paradero de Daniel Santa Cruz.

Luego de ello, en el mes de febrero de 2023, *"El Dr. Lima -abogado defensor del Sr. Pascuali-, presentó recurso de apelación contra el auto de procesamiento antes referido. Sin embargo, mediante Acuerdo de la Sala "A" de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, en fecha 7 de agosto de 2023, se tuvo por desistido dicho recurso, toda vez que no se presentó escrito alguno exponiendo los fundamentos del mismo dentro del plazo procesal correspondiente".*

Continúo con el trámite, y destacó que en fecha 17 de octubre de 2024, el Ministerio Público Fiscal presentó el correspondiente requerimiento de elevación a juicio parcial, y precisamente frente a dicha solicitud, diez días más tarde el Dr. Villarruel, por aquel entonces defensor del encartado Rodríguez, manifestó su oposición e instó el sobreseimiento de su asistido.

Finalmente, en el mes de noviembre de 2024, el aquo clausuró la etapa de instrucción y elevó la causa a esta magistratura.

Efectuado dicho relato, manifestó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, identificó algunos criterios que ayudan a determinar si se produjo una vilación de plazos razonables de juzgamiento, tales como a) la complejidad del caso, b) la actividad procesal de la interesada, c) la conducta de las autoridades judiciales y d) el análisis global del procedimiento, y citó el fallo "Bonder" n° 336:2184.

Además, y con cita a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, añadió la afectación generada



por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada.

En función de todo ello, y de *"un análisis pormenorizado de las actuaciones"* la señora Fiscal destacó que *"la complejidad de las maniobras aquí investigadas y la cantidad importante de documentación que debió ser analizada en una primera instancia por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP – actual ARCA) y posteriormente por el Órgano Fiscal a los fines de determinar los imputados y su grado de participación en los hechos, es lo que provocó, en definitiva, el paso del tiempo, no advirtiéndose que haya habido inactividad procesal indebida en los parámetros reseñados por nuestro más alto tribunal y por esto, atento que el solo transcurso del tiempo, no configura la violación a la garantía aquí planteada, para que ello así ocurra, debe probarse la demora en el trámite atribuible al órgano juzgador, al acusador o la inactividad procesal en sí misma, circunstancias que aquí no se han probado, pudiéndose advertir a simple vista que la complejidad de la causa, el gran volumen de documentación reservada y la realización de medidas probatorias complejas, es lo que ha generado la demora en el tiempo, todo por lo cual considero que debe rechazarse el planteo vinculado a la violación a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable"*.

De seguido, citó el precedente *"Barra"* de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y lo dictaminado por el señor Procurador General en autos *"Cabaña Blanca SA"*, al considerar que no existen plazos automáticos o absolutos y que las referencias a las particularidades del caso aparecen como ineludibles.

Por todo lo cual, solicitó el rechazo del planteo efectuado.

En orden al segundo planteo consideró que *"la resolución sobre dicha incidencia deberá diferirse y dictarse luego de la realización de la audiencia de debate; ello puesto que el ámbito natural de producción y discusión de la cuestión planteada es el debate oral y público"* , entendiendo





## *Poder Judicial de la Nación*

TRIBUNAL FEDERAL DE JUICIO N° 2 DE ROSARIO

FRO 7/2019/TO1

que *"en el eventual juicio a realizarse, se producirá prueba a fines de probar los elementos del tipo penal y que, por ello, deberá diferirse la decisión en cuanto al referido planteo de nulidad de la defensa."*

Subsidiariamente, manifestó que *"para el eventual caso de que VE considerare que esta es la instancia procesal para resolver este planteo, considero que la nulidad impetrada deberá ser rechazada."*

En tal sentido, destacó que *"[A]nte todo, debe partirse de los principios generales de aplicación común a todas las nulidades, los cuales determinan el carácter limitado, excepcional y restrictivo de esta sanción procesal."*

Citó jurisprudencia y refirió *"un antecedente que terminó en condena dictada por ese Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°2 de Rosario, en causa FRO 37692/2017/TO1, caratulada: "KIRSTEIN, Federico Guillermo y otro s/ asociación ilícita fiscal" -veredicto de fecha 19/09/2024-, se condenó a dos imputados como coautores penalmente responsables del delito de asociación ilícita fiscal, siendo que el tercer miembro de dicha asociación ilícita había resultado sobreseído luego de declarada la extinción de la acción penal por fallecimiento. En ese caso -al igual que en el presente y según la teoría del caso de la Fiscalía-, existió el acuerdo de voluntades entre tres personas al que refiere el art. 15 inciso c de la ley penal tributaria; sólo que una de ellas no pudo ser juzgada. En la causa "Kirstein", por haber fallecido; en la presente, porque Santa Cruz no pudo ser hallado."*

Por esas razones, consideró que en primer término *"debe diferirse la resolución sobre la nulidad impetrada, para luego de celebrada la audiencia de debate" y "Subsidiariamente [...] que dicha nulidad debe rechazarse."*

Finalmente, formuló las reservas recursivas pertinentes.

ii. Respecto del planteo de nulidad efectuado de manera subsidiario, la fiscalía entendió que el mismo debía diferirse a la realización de la audiencia de debate, *"puesto que el ámbito natural de producción y discusión de la cuestión planteada es el debate oral y público"*.



No obstante ello, y para el caso de que esto último no resultere pertinente, adelantó que el planteo debía rechazarse. Al respecto, refirió al carácter *"limitado, excepcional y restrictivo de esta sanción procesal"*, a la vez de remarcar que *"la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el solo interés formal de cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia (Fallos 311:2337)."*

Por lo demás, con cita en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Cámara Nacional de Casación Penal, entendió que *"La situación procesal de los imputados no puede supeditarse a la captura de otros coimputados, toda vez que ello implicaría una vulneración al derecho a ser juzgado en un plazo razonable (Fallos 330:3857)"* y que *"La condición de prófugo de uno de los presuntos integrantes no afecta la validez del procesamiento del resto de los implicados, en tanto existan elementos de convicción suficientes que permitan sostener la existencia de la asociación ilícita y la participación concreta de los procesados (CNCP, "R., J. S/ asociación ilícita", 2020).*

Por último, efectuó reservas recursivas pertinentes.

**III.** Del dictamen negativo se confirió nueva intervención a la defensa, oportunidad en la cual, el doctor Ricardo Uguet, insistió en su pedido de extinción de la acción penal y planteo de nulidad y solicitó que se decrete el sobreseimiento de su asistido.

En su presentación, criticó los argumentos de la Fiscalía para oponerse al planteo efectuado, en el entendimiento de que *"no estamos en presencia de una causa compleja, pues los hechos investigados, excluidos los imputados Pascuali y Santa Cruz, se limita a cuatro (4) usinas que emitieron facturas por un monto bruto total de \$ 10.877.243, lo que arroja la generación de un IVA por \$ 1.887.786, que es un monto insignificante para este tipo de causas."*

Además, refirió que *"Las medidas de prueba que involucran a la AFIP y la Policía Federal se pudieron cumplir con mayor celeridad, pues la*





## *Poder Judicial de la Nación*

TRIBUNAL FEDERAL DE JUICIO N° 2 DE ROSARIO

FRO 7/2019/TO1

*referida Administración fue la denunciante y por ello contaba con todo el material para aportar a la causa"; y al respecto resaltó que "El oficio a Telecom (ex Cablevisión) se diligenció el 21/07/2017 (Fs. 106) en la causa "Porta Silvia Viviana s/ evasión agravada tributaria" (Fs. 120) y fue contestado el 28/07/2017" y que "Aun así, la Fiscalía demoró más de un año para presentar el Requerimiento de Instrucción y casi siete (7) años presentar el requerimiento de elevación a juicio".*

Por lo demás, se remitió a los fundamentos efectuados en su primera presentación e insistió en que se declare extinguida la acción penal *"por aplicación de lo dispuesto en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (art. 14) y la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8), que rigen en virtud del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional."*

Respecto al segundo planteo, la defensa de Rodríguez criticó los fundamentos de la fiscalía en orden a la falta de un perjuicio concreto, en el entendimiento de que *"ser llevado a juicio oral sin la presencia del tercer supuesto integrante de la asociación ilícita, impidiendo, por ejemplo, la realización de un careo, es de por sí un daño mensurable"*.

Por lo demás, en relación a los precedentes mencionados por la fiscalía, manifestó que ninguno de ellos se refiere a la posibilidad de elevar a juicio a solo dos integrantes de una pregunta asociación ilícita que.

Respecto del consorte de causa Santa Cruz, entendió que el ministerio público *"debió agotar todos sus recursos para traerlo a juicio y permitir, por ejemplo, que Santa Cruz pidiera carearse con la única testigo (Sabrinca Vallejos) que lo menciona realizando un viaje a PErغامino, acompañado a PAscuali; lo que pudo ocurrir porque eran amigos y viajaron juntos por algún otro motivo, o con la testigo Lilia Martínez, quien lo menciona junto a Pascuali cunado le pidieron que sacara la clave en AFIP"*.

Entendió también que *"los argumentos de acusación resultan endeble para ubicar a Santa Cruz como integrante de la asociación ilícita. Su rol se podría haber limitado a ser otra de las usinas, lo que implicaría la ausencia del tercer integrante requerido para configurar el tipo penal"*.



Consecuentemente, concluyó que *“La inacción de la Fiscalía para llevar a juicio a Santa Cruz podría responder a una estrategia orientada a mantener la acusación contra los otros dos presuntos integrantes, sindicados de cometer un delito de carácter meramente abstracto, evitando, con ello, la necesidad de extremar las medidas probatorias tendientes a determinar si, efectivamente, se cometieron delitos tributarios con las presuntas facturas apócrifas emitidas por las usinas”* y solicitó nuevamente que *“se declare la nulidad de la elevación a juicio (parcial) por abarcar solo a mi defendido y a Víctor Luis Pascuali, dejando afuera a Daniel Santa Cruz, supuesto tercer integrante de la asociación ilícita investigada.”*

Citó nuevamente jurisprudencia.

IV. Expuestas las posiciones de las partes, y previo a ingresar en el tratamiento de las cuestiones planteadas, abocándome en primer término al planteo de insubsistencia de la acción penal.

i. Ante todo, corresponde destacar el incuestionable valor de la garantía de obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas, derivado del artículo 18 de la Constitución Nacional y del artículo 8 inc. 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, entiendo que la aplicación de la mencionada garantía, no se genera automáticamente por el paso de un determinado período de tiempo; por el contrario, es una garantía con la que cuentan todos los imputados, y que se hará efectiva sólo, una vez analizado el caso particular.

De este modo se ha expedido la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal al resolver que: *“...Lo ‘excesivo’ de la duración de un proceso cualquiera es un concepto imposible de mensurar con parámetros objetivos. Su duración razonable depende en gran medida de diversas circunstancias propias de cada caso, razón por la cual, el derecho a obtener un juicio sin dilaciones indebidas no puede traducirse en un número de días, meses o años”* (Voto de los Dres. David, Madueño, Fégoli; Registro N° 6851.2. *“Morris Dloogatz, Susana Raquel s/ recurso extraordinario”*).





## *Poder Judicial de la Nación*

TRIBUNAL FEDERAL DE JUICIO N° 2 DE ROSARIO

FRO 7/2019/TO1

En idéntico sentido, la C.S.J.N. consideró que la propia naturaleza de la garantía de ser juzgado en un plazo razonable impide determinar con precisión a partir de qué momento, o bajo qué circunstancias comenzaría a lesionarse, pues la duración razonable de un proceso depende en gran medida de diversas circunstancias propias de cada caso, por lo que el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas no puede traducirse en un número de días, meses o años (Fallos: 322:360, votos de los jueces Fayt y Bossert; y 327:327).

ii. A diferencia de lo que sucede con el instituto de la prescripción de la acción penal regulado en el art. 67 del CP, que es de orden público y declarable de oficio en cualquier instancia del proceso, la declaración de extinción por insubsistencia de la acción penal en virtud del transcurso del plazo razonable para ser juzgado, no reviste tal carácter, y por lo tanto, mediando oposición fiscal, la decisión en este punto, requiere de un cuidadoso análisis.

Así, reiterando lo señalado en el considerando anterior en orden a la imposibilidad de determinar con precisión el momento o bajo qué circunstancias se lesiona dicha garantía, la C.S.J.N., en los antecedentes referidos, tal como lo señaló la fiscalía, se identificó algunos criterios que ayudan a determinar si se produjo tal violación; a saber: la complejidad del caso, la conducta de los imputados y la manera en que el asunto fue analizado y tramitado por ante las autoridades judiciales.

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales consideró que el concepto de plazo razonable al que se hace referencia en el artículo 8, inc. 1º, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "*debe medirse en relación a una serie de factores tales como la complejidad del caso, la conducta del inculpado y la diligencia de las autoridades competentes en la conducción del proceso*" (caso 11.245, resuelto el 1º de marzo de 1996, párrafo 111º y caso "LÓPEZ ÁLVAREZ v. HONDURAS", del 1º de febrero de 2006); elementos a los que dicho organismo consideró pertinente añadir



–según sea el caso– la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada (caso “VALLE JARAMILLO”, Serie C nº 192, sentencia del 27/11/2008, párr. 155 y caso “KAWAS”, Serie C nº 196, sentencia del 3/04/2009, párrs. 112 y 115).

En consecuencia, habiendo reseñado el marco jurisprudencial y normativo, corresponde analizar a continuación el planteo efectuado por la defensa, en función de los parámetros enunciados.

iii. En función de tales parámetros, corresponde analizar el trámite del proceso, concretamente lo relativo a la actividad procesal. Así, tal como se desprende de las actuaciones incorporadas al expediente digital, se advierte que la presente investigación tuvo su inicio origen en la acumulación de distintos legajos iniciados por hechos de presunta evasión tributaria agravada, que derivaron en la conformación de una hipótesis de asociación ilícita fiscal conforme el art. 15 inc. "c" de la Ley 24.769. Formalmente, la causa se habría iniciado el día 28 de diciembre de 2018, a partir del requerimiento de instrucción presentado por el Ministerio Público Fiscal. Durante los dos años siguientes, se llevaron a cabo numerosas medidas de prueba –entre ellas, pedidos de informes a la AFIP/ARCA, a empresas de telecomunicaciones, y a fuerzas federales– orientadas a determinar la estructura y alcance de la organización investigada, así como la identificación precisa de sus presuntos integrantes.

Seguidamente, en los meses de noviembre de 2021 y marzo del año siguiente, se les recibió declaración indagatoria a Víctor Pascuali y a Luciano David Rodríguez respectivamente.

El día 30 de noviembre de 2022, el aquo dictó el procesamiento de los nombrados, siendo recurrido únicamente por la defensa de Pascuali en el mes de febrero del año siguiente. Sin embargo, en el mes de agosto de ese mismo año, la alzada tuvo por desistido el recurso, toda vez que la defensa no lo mantuvo ante dicho cuerpo; lo cual, como bien lo señaló la fiscalía, esa falta de continuación de la vía recursiva,





## *Poder Judicial de la Nación*

TRIBUNAL FEDERAL DE JUICIO N° 2 DE ROSARIO

FRO 7/2019/TO1

puede configurar una dilación atribuible a esa parte, en tanto revela una falta de impulso efectivo de un recurso previamente deducido, con la consecuencia que no sólo frustró la revisión pretendida, sino que además generó una innecesaria demora en la continuidad del proceso.

Siguiente con el derrotero procesal, en fecha 17 de octubre del año pasado, la fiscalía requirió la elevación de la causa a juicio, respecto de la cual motivó la oposición con un pedido de sobreseimiento por parte de la defensa del propio Rodríguez, por aquel entonces a cargo del Dr. Villaruel.

Finalmente, en el mes de noviembre de 2024, se rechazó el planteo defensivo, se clausuró la etapa de instrucción y se remitió la causa a esta magistratura, la cual, finalmente, ingresó el día 12 de febrero del corriente año, y desde esa fecha, se citó las partes a juicio, se diligenció la prueba ofrecida y se fijó fecha para la realización del debate para el día 6 de agosto próximo.

Durante todo ese período, se observó un impulso sostenido del proceso, sin que se adviertan lapsos de inactividad procesal atribuibles al órgano judicial o al Ministerio Público Fiscal, ni dilaciones injustificadas en el avance de las investigaciones. En ese sentido, la fiscalía ha señalado con razón la complejidad de la causa, el importante volumen de documentación analizada y la multiplicidad de medidas probatorias realizadas, todo lo cual justifica el tiempo insumido; sin soslayar que durante los años 2020 y 2021 las circunstancias especiales relacionadas con la emergencia sanitaria producida por el COVID 19 han afectado la modalidad de trabajo y el normal desenvolvimiento de del organo judicial en su conjunto.

En el presente, si bien ha transcurrido un lapso considerable desde que se comenzó a investigar los supuestos hechos endilgados (2018) hasta la fecha, no puede considerarse excesivo ni irrazonable; al contrario, se advierte que el proceso tuvo continuidad en su tramitación, infiriendo que el empleo del tiempo por parte del Estado



fue racional, consecuencia de una constante actividad jurisdiccional, con la salvedad de que la especial naturaleza y gravedad de los presuntos hechos, fueron circunstancias que, en su apreciación conjunta resultan razonables para que al día de hoy no se haya llevado a cabo el debate.

iv. En relación a la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal a lo largo de los años en orden a la garantía que tiene toda persona a obtener un juicio dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, entiendo que dista demasiado respecto del presente causa. Así, en el precedente “*Barra*”, la causa llevaba dieciséis años de trámite y el imputado quince en condiciones de procesado (Fallos 327:327). Lo mismo sucedió en el precedente “*Kipperband*”, cuya disidencia de los doctores Petracci y Boggiano formó mayoría en “*Barra*” antes citado, el trámite había durado catorce años y el procesado llevada trece en esa condición (Fallos: 322:360). O bien, en el precedente “*Egea*”, donde la investigación había durado dieciocho años y el imputado llevaba diecisiete como procesado (Fallos: 327:4815). Finalmente, en el caso “*Mozzatti*” se trataba de un proceso que llevaba veinticinco años de duración.

En función de lo expuesto, reitero, se advierten diferencias sustanciales en el trámite de la presente causa con aquellos precedentes donde la Corte receptó la garantía del “plazo razonable”.

Por lo demás, considero que la entidad de los presuntos hechos, debe ser un punto a tener en cuenta para analizar la razonabilidad del tiempo en el proceso penal; y al respecto, corresponde brevemente señalar que Rodríguez se encuentra requerido a juicio por la presunta comisión de hechos vinculados a una asociación ilícita tributarida, circunstancia que refleja de por sí una complejidad distinta a otras causas, evidenciándose presuntos hechos sumamente graves que necesariamente deberán ventilarse en un debate oral.





## *Poder Judicial de la Nación*

TRIBUNAL FEDERAL DE JUICIO N° 2 DE ROSARIO

FRO 7/2019/TO1

Relacionado con esto, resulta pertinente traer a colación el artículo “La razonabilidad del tiempo en el proceso penal” publicado en la Revista Jurídica de la “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional”, N° 3, en el mes de agosto de 2018) por el doctor Juan Martín Nogueira (Fiscal Ad Hoc de la Unidad Fiscal Federal de la ciudad de La Plata), en la que enumeró las circunstancias que de acuerdo a la CIDH corresponde tener presente a los fines de establecer si estamos en presencia de un plazo irrazonable; a saber: “1. La complejidad de la causa; 2. La actividad procesal asumida por el interesado; 3. La actuación de los órganos judiciales; 4. La globalidad del juicio; 5. Afectación de la situación jurídica de la persona involucrada; 6. La situación de vulnerabilidad del peticionante, y al analizar la primera, dijo “...son diversos los factores que pueden incidir para determinar cuándo estamos en presencia de ello, como ser la consideración de la entidad de los hechos...”.

v. Por último, se advierte que la defensa ha omitido señalar de qué manera la duración del proceso ha perjudicado a su asistido o ha obstaculizado su derecho de defensa, sobre todo, teniendo en cuenta que no se encuentra privado de su libertad.

En síntesis, la sostenida violación al plazo razonable ha sido expuesta en términos generales y absolutos, desprovista de todo desarrollo sobre las circunstancias concretas del trámite y del referido exceso. Tal defecto, sella la suerte de la pretensión, pues incumbe a quien invoca la afectación de la citada garantía, su acreditación, toda vez que en esta materia no hay plazos automáticos o absolutos y, precisamente, la referencia a las particularidades del caso aparece como ineludible (CSJN Fallos: 332:1512 y sus citas; Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 CABA, “IGLESIAS, José Antonio y otros s/ encubrimiento agravado -Incidente de extinción de la acción penal formulado por la defensa de Juan Saúl Jinkus y Juan Carlos Pessolano-”, Reg. N° 3648/11; Causa n° 1515/12, “Montiel, Francisco Santiago y otros s/ inf.



arts. 149 bis, 2° párrafo, C.P. y otros – inc. de falta de acción y nulidad promovido por los Dres. Eduardo Soares y Verónica Heredia”, Reg. N° 6823, rta. el 2/9/2016).

Insisto, la simple alegación del paso del tiempo, no es suficiente para alcanzar la violación a la garantía señalada.

**vi.** En razón de todo lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de insubsistencia de la acción penal.

**V.** Ingresando al planteo subsidiario, coincido con lo dictamando en primer término por la fiscalía, en cuanto a que la pretensión de la defensa en orden a la nulidad del requerimiento de elevación a juicio por una supuesta deficiencia del tipo penal achacado, es una cuestión que las partes deberán discutir en el marco de un contradictorio; máxime cuando la propia defensa -al momento de refutar los argumentos de la fiscalía y remarcar una diferencia con un precedente de este Tribunal-, remarcó justamente esto último en orden a la producción de prueba de descargo que puede contradecir la acusación; a saber: *"No es la situación de Daniel Santa Cruz, quien no falleció y solo fue mencionado de manera circunstancial en la causa. La Fiscalía debió agotar todos sus recursos para traerlo a juicio y permitir, por ejemplo, que Santa Cruz pudiera carearse con la única testigo (Sabrina Vallejos) que lo menciona realizando un viaje a Pegamino, acompañando a Pascuali; lo que pudo ocurrir porque eran amigos y viajaron juntos por algún otro motivo, o con la testigo Lilia Martínez, quien lo menciona junto a Pascuali cuando le pidieron que sacara la clave en AFIP"*.

En efecto, siendo el debate el ámbito natural de producción de la prueba para decidir acerca de la discusión planteada por las partes, corresponde diferir el planteo de la defensa al momento oportuno.

**VI.** Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, este Tribunal, es que se:

**RESUELVE:**





## *Poder Judicial de la Nación*

TRIBUNAL FEDERAL DE JUICIO N° 2 DE ROSARIO

FRO 7/2019/TO1

**I. RECHAZAR** el planteo de extinción de la acción penal por violación al plazo razonable y consecuente sobreseimiento del imputado Luciano David Rodríguez efectuado por el Dr. Ricardo Uguet, con costas (art. 530, siguientes y concordantes del Código Procesal Penal Federal).

**II. DIERIR** el planteo de nulidad invocado por el Dr. Uguet hasta la realización del debate oral y público.

**III. INSERTAR**, hacer saber y publicar en el Centro de Información Judicial.  
(Res. n° 145/2025)

